

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

APELACIÓN - SENTENCIA	
DEMANDANTE	RENZO DE JESUS GÓMEZ BUITRAGO
DEMANDADOS	NICOLAS HERNANDO LOPEZ EUSSE, en calidad de propietario del establecimiento de comercio denominado METALICAS CASTILLA
RADICADO	05001-31-05-009-2019-0130-01
MAGISTRADA PONENTE	MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
TEMA	Contrato realidad – indemnizaciones moratorias.
DECISIÓN	Confirma

Medellín, seis (06) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, integrada por los magistrados ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA, LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZÁBAL y como ponente MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022 que dispuso adoptar como legislación permanente las normas contenidas en el Decreto Ley 806 de 2020, y surtido el traslado correspondiente, procede a proferir sentencia ordinaria de segunda instancia dentro del presente proceso, promovido por el señor **RENZO DE JESUS GÓMEZ BUITRAGO** en contra del señor **NICOLAS HERNANDO LOPEZ EUSSE**, en calidad de propietario del establecimiento de comercio denominado **METALICAS CASTILLA**.

La Magistrada Sustanciadora, **MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO**, declaró abierto el acto y a continuación, después de deliberar sobre el asunto, de lo que se dejó constancia en el **ACTA No 053**, se procedió a decidirlo en los siguientes términos:

## **I. – ASUNTO**

Es materia de la Litis, resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Medellín, Antioquia, en la audiencia pública celebrada el día 03 de marzo de 2022.

## **II. – HECHOS DE LA DEMANDA**

Como fundamento de las pretensiones incoadas con la demanda, se expuso, en síntesis, lo siguiente: El actor fue contratado de manera verbal a término indefinido, desde el 1º de enero de 1998, por el señor NICOLAS HERNANDO LOPEZ EUSSE, como propietario del establecimiento de comercio denominado METALICAS CASTILLA, para que cumpliera funciones varias, como operario de máquinas de metalúrgica, cumpliendo funciones de doblador y cortador; el actor realizaba la prestación del servicio de manera personal, de lunes a viernes, de 7:00 am a 6:00 pm, y los sábados de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.; su asignación salarial mensual era igual al salario mínimo legal mensual vigente; pese a lo anterior, al señor GOMEZ BUITRAGO nunca le fue reconocido el pago de las horas extras o trabajo complementario que superaba las 48 horas semanales; el trabajador fue afiliado a los tres subsistemas de la seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales), pero no a un fondo de cesantías.

Indica el introductorio que el empleador del actor canceló las prestaciones sociales al trabajador, tales como, primas de servicio, vacaciones, intereses de las cesantías y cesantías de manera directa, pero nunca por intermedio de un fondo de cesantías, haciendo firmar al mismo constancia del pago, y donde se indicaba que los contratos siempre principiaban el 1º de enero y terminaban en el mes de diciembre del respectivo año liquidado; el demandado no canceló al actor algunas incapacidades médicas, por omisión en la entrega completa de la información a la E.P.S, y se limitó a realizarle prestamos por los valores de las incapacidades; que el señor Gómez Buitrago sufrió varios accidentes de trabajo, entre ellos los ocurridos los día 06 y 08 de marzo de 2002, el 01 de

agosto de 2008 y el 25 de octubre de 2012, mismos que fueron reportados por su empleador.

Refiere la demanda que el día 7 de agosto de 2016, ante los variados quebrantos de salud debido a los accidentes laborales y las incapacidades que ello generaba y que no le eran canceladas, el demandante decide RENUNCIAR al contrato laboral, por el claro incumplimiento de las obligaciones de su empleador; desde esa fecha éste no ha cancelado las prestaciones sociales del año 2016, a saber: Primas de servicio, cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones y, menos aún, la indemnización por el despido indirecto.

Se indica en el libelo genitor que al señor NICOLAS HERNANDO LOPEZ EUSSE se le elevó derecho de petición, el día 21 de noviembre de 2016, donde se le solicitaba, entre otras cosas, lo siguiente: Información sobre los aportes a la seguridad social desde enero de 1998, constancias de afiliación a un fondo de cesantías, constancia de pagos de horas extras, constancias de reportes de accidentes, reglamento interno de trabajo, constancia de pago de incapacidades laborales, certificado de cargos y labores desempeñadas, fechas de inicio y terminación, historia clínica ocupacional, AROS, estudio del puesto de trabajo entre otros; el 19 de enero de 2017, el señor LOPEZ EUSSE dio respuesta al derecho de petición en forma parcial, indicando que requería precisión sobre reporte de los aportes a la seguridad social, pese a que la petición fue precisa, desde el mes de enero de 1998; que se adjuntó en la respuesta un cd que contiene varios reportes de accidentes de trabajo, varias liquidaciones anuales, y un reglamento interno de trabajo, sin resolución de aprobación; que en lo demás, indicó que se les remitió a la EPS del trabajador.

### **III. – PRETENSIONES**

La acción judicial está dirigida a que SE DECLARE: Que entre el señor RENSO DE JESUS GOMEZ BUITRAGO y el señor NICOLAS HERNANDO LOPEZ EUSSE, propietario del establecimiento de comercio denominado METALICAS CASTILLA, existió un contrato laboral a término indefinido, que se dio entre el día 06 de enero de 1998 al 07 de Agosto de 2016;

que el contrato fue verbal, a término indefinido; que el contrato terminó por incumplimiento de las obligaciones del empleador, lo que constituyó un despido indirecto.

Que, como consecuencia de las anteriores declaraciones, SE CONDENE al demandado a pagar al actor los siguientes conceptos: Salarios o recargos por trabajo complementario o en horas extras, nocturnas y dominicales; subsidio familiar; cesantías de toda la relación laboral; indemnización moratoria por la no consignación de las cesantías en un fondo constituido para tal fin; indemnización por despido injusto; primas de servicio, intereses a las cesantías y vacaciones, del año 2016; indemnización moratoria por no pago de las prestaciones sociales a la hora de terminar injustamente el contrato laboral; lo que ultra y extra petita resulte probado; y las costas judiciales.

#### **IV RESPUESTA A LA DEMANDA:**

Una vez admitida la demanda, luego de subsanada, fue debidamente notificada, procediendo el demandado a dar respuesta, por intermedio de apoderada judicial.

A través de la misma, frente a los hechos, indicó que es cierto que la relación laboral inició el 1 de enero de 1998, en el cargo y en el sitio indicado en la demanda, precisando que el contrato laboral a término indefinido finalizó en el mes de diciembre de 2000, por mutuo acuerdo entre las partes, pero que posteriormente, el día 15 de enero de 2001, suscribieron un contrato laboral a término fijo inferior a un año, con fecha de vencimiento en día 21 de diciembre del mismo año; que no está de acuerdo sobre la jornada laboral que señala la demanda, manifestando que la acordada fue de 7:00 a 16:00 PM, de lunes a viernes, con una hora y cuarenta y cinco minutos de descanso; que los días sábados el horario laboral era de 07:00 a 12:45; que en muchas ocasiones el aquí demandante llegaba tarde al cumplimiento de sus funciones, resaltando que hubo situaciones en que los días sábados no asistía a su lugar de trabajo argumentando ser el organizador y vocalista de una banda de rock. Indica que el demandante en su jornada laboral solo trabajaba 7 horas y 45 minutos, sin tomar en cuenta el descanso, y que, incluso, en muchas ocasiones salía de su

lugar de trabajo a las 15:30, además de los sábados que faltaba a su lugar de trabajo.

Indica que no es cierto que el actor no haya sido afiliado a un fondo de cesantías, pues lo fue a Protección S.A.; que, no obstante, cuando se suscribió el contrato a término fijo, el demandante solicitó al empleador, de manera personal, que el auxilio de cesantía no le fuese depositado en un fondo, aduciendo que necesitaba el dinero para cubrir ciertas obligaciones financieras, y, además de esto, sostenía tener medidas de embargo sobre estos conceptos por entidades bancarias; niega que el demandado haya incumplido sus obligaciones salariales y explica, respecto del auxilio de cesantías, que en principio su consignación se hacía a un fondo, pero que, en un acto de comprensión con la situación particular del actor accedió a entregarle este dinero de manera personal. Con respecto al pago de incapacidades, señala que, a pesar de que la EPS no realizaba el pago de auxilios por incapacidad al demandante, Metálicas Castilla en todo momento pagó al trabajador su salario de manera íntegra, pese a que informaba en muchas ocasiones de su estado de incapacidad cuando se acercaba el pago de salarios, y sin que aportara los documentos que lo soportaran.

Que, de otro lado, es verdad que el señor LOPEZ EUSSE entregaba sumas de dinero en comodato al actor, pero nunca fue en forma de pago por concepto de auxilio de incapacidades, máxime que el valor ((\$2.000.000) de estos préstamos era muy inferior al de las incapacidades. Indica que hay imprecisiones sobre las fechas de los accidentes de trabajo, las cuales señala, resaltando que éstos nunca fueron accidentes de envergadura y no pasaron de ser cortes de piel en la mano, sin secuelas, y las incapacidades nunca excedieron el mes.

Resalta que el actor en ningún momento tuvo la sutileza de notificar a su empleador acerca de su decisión de no continuar con el vínculo laboral; que fue luego de varios días que el demandado se comunicó con él para saber el motivo por el cual no se había presentado a trabajar, a lo que el trabajador le contestó que había decidido finalizar la relación laboral sin dar más explicaciones; que luego, un mes después, a 2 cuadras del establecimiento

de comercio del demandado constituyó una sociedad con ex cliente de su empleador anterior, teniendo como objeto el negocio de la metalurgia, de lo infiere fue esta la verdadera razón para la finalización del contrato; indica que el empleador, luego de que el actor decidiera terminar la relación laboral, esperó un mes para que se presentara a laborar nuevamente, lo que explica que se le cotizara a pensión hasta el mes de septiembre de 2015, a pesar de haber finalizado la relación laboral en el mes de agosto; que luego el demandado se comunicó con el actor para que se acercara al establecimiento de comercio por el pago de la liquidación del contrato laboral, lo cual nunca sucedió.

Señala que como quedada un alta suma de dinero que el señor Renso debía por concepto de mutuo al señor Nicolás, de los que tiene los documentos en los que autorizaba descontar de sus prestaciones sociales para el pago e estos préstamos, consideró el demandado que era procedente realizar una compensación con los factores causados por concepto de prestaciones sociales, sin que quedara debiendo ningún concepto laboral.

Se opuso a las pretensiones de la demanda y como medios de defensas propuso las siguientes excepciones de mérito: PAGO DE TODAS LAS ACREENCIAS PRODUCTO DE LA RELACION LABORAL; PRESCRIPCION EXTINTIVA DE LA OBLIGACIÓN; INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DEL DEMANDADO; AUSENCIA DE NEXO CAUSAL EN LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO LABORAL; EXISTENCIA DE LA BUENA FE EN EL PAGO DE LAS ACREENCIAS LABORALES; COBRO DE LO NO DEBIDO POR PARTE DEL DEMANDANTE; COMPENSACIÓN DE LA OBLIGACION; TEMERIDAD Y MALA FE DEL DEMANDANTE; CUALQUIER OTRA QUE RESULTARE PROBADA AL INTERIOR DEL PRESENTE PROCESO.

## **V. - DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA**

En audiencia pública celebrada el 03 de marzo de 2022, el Juez de conocimiento declaró que entre el actor, como trabajador, y el señor NICOLAS HERNANDO LÓPEZ EUSSE, como empleador, existieron dos contratos de trabajo; uno, de duración indefinida del 01 de enero de 1998 al 23 de diciembre de 2000, celebrado verbalmente, y un segundo contrato laboral del 5 de enero

de 2001 celebrado a término fijo inferior a un año, concretamente por once meses y seis días a partir del 15 de enero de 2001 que vencía el 21/12/2001 que fue prolongado en el tiempo en virtud de la ley, tal como se explicó en la parte motiva de la sentencia. También declaró probada las excepciones de pago total de las acreencias por la relación laboral e inexistencia de la obligación, y absolvió al demandado de todas las pretensiones incoadas en su contra por el señor GOMEZ BUITRAGO. TERCERO, condenando en costas al demandante en favor del demandado, fijando las correspondientes agencias en derecho.

Como fundamentos de su decisión, para **lo que al recurso interesa**, respecto de la reclamación del auxilio de la cesantía, que el demandante confesó al redactar el numeral 9º de los hechos de la demanda, que el accionado canceló tal concepto en forma directa sin realizar la consignación en un fondo administrador, haciendo firmar constancia de que los contratos iniciaban siempre el primero de enero de cada año, razón por la cual reclama el pago de este concepto durante toda la vigencia de los contratos de trabajo, indicó el a quo que reposa en el expediente contentivo del proceso prueba documental de que el demandado inicialmente atendió lo reglado en el artículo 99 de la ley 50 en 1990, depositando el auxilio de cesantías en un fondo administrador (Expediente digital, folios 475 a 489); que, igualmente del año 2000 en adelante, hasta el año 2016, pagaba el trabajador directamente dicha prestación por petición de este último como lo confesó el actor al redactar los hechos de la demanda, circunstancia que ha venido siendo avalada por la jurisprudencia nacional al indicar la Corte Supremo de Justicia, Sala de Casación Laboral que, no obstante lo reglado en el artículo 254 del CST, referente a la pérdida de pagos parciales de cesantía no autorizados legalmente, ese proceder del empleador, dice la Corte, aunque ilegal, fue ejecutado por solicitud del trabajador o sea con su anuencia, es decir que, con su actuar generó, patrocinó, estímulo y aceptó el quebranto legal en que incurre el empleador, el cual, de otro lado, no le ocasionó perjuicios pues la prestación le fue cancelada directamente; que así le ha indicado la Corte en la sentencia 38757 del año 2010, entre otras; que, por tanto, siguiendo la orientación jurisprudencial, absuelve a la demandada de esta súplica.

Manifestó que, con relación a la sanción moratoria que contiene el artículo 99 de la ley 50 en 1990 por la no consignación del auxilio de cesantía a un fondo administrador, indicó que no hay lugar a ella, resaltando lo dicho por la Corte en la sentencia citada en el sentido que ésta no es de carácter automático, por lo que, al observar ese alto Tribunal que la empresa no consignó la cesantía correspondiente al año 2000, sino que la pagó directamente al trabajador, consideró que tal proceder, aunque ilegal, fue por solicitud expresa de este, es decir, con su anuencia, por lo que no es admisible que, al compartir entonces responsabilidad con el empleador, se le otorgue al ex trabajador una indemnización favorable, cuando con su actuar generó, patrocinó, estimuló y aceptó el quebranto legal en que incurrió el empleador, argumento que acoge en este caso, por lo que absolvió al demandado de tal pretensión.

En cuanto a la indemnización, por no pago de prestaciones sociales a la terminación vínculo contractual laboral, (Artículo 65 del CST), luego de referirse a lo dicho por la jurisprudencia nacional en el sentido de indicar que ésta no es de aplicación automática, sino que el juzgador debe analizar en cada caso particular si la conducta omisiva total o parcial del empleador estuvo rodeada de buena fe, señala que en el presente caso la relación contractual inter partes llegó a su fin el 7 de agosto del 2016, sin que obre prueba que el empleador haya procedido como lo manda dicha norma, esto es, con el pago de prestaciones sociales a la terminación del contrato de trabajo, ni hay constancia de que haya procedido a consignar a órdenes del juez laboral lo que considera deber por prestaciones sociales al demandante en la fracción laborada a su servicio en el año 2016.

Que, sin embargo, por la forma atípica como se ejecutaron los contratos de trabajo entre demandante y demandado y la forma como procedió el empleado durante la vigencia de los mismos, teniendo en cuenta el trabajador solicitó varios créditos del empleador y que, como él mismo lo confesó en su interrogatorio, autorizó para descontarlos por cuotas de su salario, considera este despacho que bien podía el demandado, para el momento de la terminación del contrato de trabajo, retener o deducir lo debido del saldo arrojado por la liquidación final de prestaciones sociales, que en este caso

correspondía a la fracción laboral en el año 2016, incluso, sin la autorización expresa del trabajador como lo exige el artículo 59 del CST.

Indica que, acudiendo a la orientación jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia, entre otras, en la SL 525 del 2020, radicando el 74363 del 17 de febrero, cuyo aparte pertinente lee, concluye que no se requiere autorización del trabajador, para descontar lo debido por éste, a la terminación del contrato de trabajo, pues es apenas obvio, dice la Corte, que el trabajador no se puede ir de la empresa debiendo el dinero al empleador, de suerte que este puede descontar lo adeudado de la liquidación final del trabajador, lo que incluye salarios y prestaciones sociales; que el descuento de la liquidación final no está sujeto a ningún límite, de suerte que se puede descontar todo lo que sea necesario para hacer la compensación completa de lo adeudado por el trabajador. Que, además, la afirmación del demandante en su interrogatorio, de que los préstamos obedecieron al incumplimiento de las ARL o de las EPS en el pago de las incapacidades, se quedó en eso, en mera afirmación; que hay constancia en el expediente no sólo de la afiliación al sistema integral de seguridad social por parte del empleador sino el pago de incapacidades (Archivos PDF 9, 10, 11, 12, 13, 19 y 16 del expediente digital), por lo que también absuelve de esa pretensión al demandado.

## **VI. – RECURSO DE APELACIÓN.**

El apoderado de la parte demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primer grado, en los siguientes términos:

Manifiesta su inconformidad, en primer lugar, respecto de los argumentos expuestos en la sentencia en cuanto a que no existieron los elementos necesarios para declarar la sanción moratoria por la no consignación de las cesantías, habida cuenta que, como bien lo dijo el despacho, se trataron más bien de dos relaciones laborales, una de ellas con un vínculo indefinido y la segunda con un vínculo a término fijo. que fue objeto de renovaciones o de prórrogas; resalta que el debate o la plataforma fáctica en la que se desarrolló el proceso fue justamente la unidad de un solo contrato, al menos desde el año 2001, mientras la parte demandada alegó que eran contratos sucesivos, encontrando que, justamente, es de allí donde emerge claramente la mala fe

del empleador, pues, bajo el pretexto o quizás el engaño al trabajador, de que se trataba de una finalización anual de cada contrato, liquidaba todas las prestaciones sociales y se sentía autorizado, vía de tal engaño, a entregarle de manera directa al actor las cesantías, aspecto que éste reconoce.

En segundo lugar, difiere respecto a la indemnización por el no pago de las prestaciones (que no fue objeto de condena por el a quo), pues considera que no existió un análisis de la foliatura, en el sentido que el documento que da cuenta de la liquidación de las prestaciones sociales y los salarios no da cuenta de ningún descuento, o al menos no relaciona cuál es el débito del empleado para con su empleador y que autorizara por tal suerte dicho descuento, sino que fue el propio demandado quien fabricó, maquinó, su prueba a través de sus declaraciones, diciendo que existía una deuda y que, sin más ni menos, decidió descontarla, cuando juiciosamente y ordenadamente y bajo criterios de buena fe, debió probar en el proceso cuál es el valor que se le debía y así debió ilustrarlo claramente en la liquidación de las prestaciones sociales, cosa que no existe y que en todo caso, considera no fue valorado suficientemente dicho documento que diera razón de un descuento válido.

#### **Alegatos de Conclusión:**

No se presentaron alegatos de conclusión en esta instancia.

#### **VII. – CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL**

Los presupuestos procesales, requisitos indispensables para regular la formación y desarrollo de la relación jurídica procesal, como son demanda en forma, Juez competente, capacidad para ser parte y comparecer al proceso se encuentran cumplidos a cabalidad en el caso objeto de estudio, lo cual da mérito para que la decisión que se deba tomar en esta oportunidad sea de fondo.

**Naturaleza jurídica de la pretensión.** – Contrato de trabajo. Cesantías anuales pagadas directamente al trabajador – Sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990. Descuentos salariales al terminar la relación laboral – indemnización moratoria del artículo 65 del CST.

Planteado el recurso de apelación tal y como se encuentra, los problemas jurídicos estriban en dilucidar: (i) Si hay lugar al pago de la indemnización moratoria por la no consignación de cesantías en un fondo administrador (Art. 90 de la Ley 50 de 1990), teniendo en cuenta que las mismas fueron pagadas anualmente, directamente al actor; (ii) si la deducción realizada al trabajador al finalizar el contrato de trabajo, por parte del empleador demandado, en atención a préstamos realizados al primero, se encuentra o no prohibida en los términos del art. 59 del Código Sustantivo de Trabajo, y de ser así, pasará la Sala a determinar si en el sub lite, resulta procedente la indemnización moratoria a la que alude el art. 65 del Código Sustantivo de Trabajo.

No se discute en esta instancia que entre los litigantes se celebraron dos contratos de trabajo; uno, verbal a término indefinido, del 01 de enero de 1998 al 23 de diciembre de 2000, y otro, a término fijo inferior a un año, a partir del 15 de enero de 2001, que vencía el 21/12/2001 y que fue prolongado en el tiempo conforme a la Ley y que terminó por renuncia del trabajador el 7 de agosto de 2016.

Ahora, en atención a lo planteado por la censura, en el sentido de indicar que en el presente caso eran procedentes las sanciones moratorias establecidas en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y en el artículo 65 del CST, cabe señalar que la aplicación de estas sanciones no es automática, sino que debe estudiarse en el caso concreto si el empleador obró de buena o de mala fe, como precisa la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia SL 3936-2018, Rad. 70860, de 5 de septiembre de 2018, M.P. Dra. Clara Cecilia Dueña, en la que se indica:

*"Esta Corte, reiteradamente, ha puntualizado que la sanción moratoria prevista en los artículos 65 del Código Sustantivo del Trabajo y 99 de la Ley 50 de 1990, procede cuando quiera que, en el marco del proceso, el empleador no aporte razones satisfactorias y justificativas de su conducta. Para esto, se ha dicho que el juez debe adelantar un examen riguroso del comportamiento que asumió el empleador en su condición de deudor moroso y de la globalidad de las pruebas y circunstancias que rodearon el desarrollo de la relación de trabajo, en aras de establecer si los argumentos esgrimidos por la defensa son razonables y aceptables.*

*De igual modo, la Sala ha estimado que la buena o mala fe no depende de la prueba formal de los convenios o de la simple afirmación del demandado de creer estar actuando conforme a derecho, pues, en todo caso, es indispensable la verificación de «otros tantos aspectos que giraron alrededor de la conducta que asumió en su condición de deudor obligado; vale decir, además de aquella, el fallador debe contemplar el haz probatorio para explorar dentro de él la existencia de otros argumentos valederos, que sirvan para abstenerse de imponer la sanción» (CS) SL9641-2014).*

*Por tanto, la forma contractual adoptada por las partes no es razón suficiente para eximir de la sanción moratoria, en la medida que, igualmente, deben ser allegados al juicio otros argumentos y elementos que respalden la presencia de una conducta conscientemente correcta.”*

Respecto al primer punto de inconformidad del apelante, atinente a la sanción moratoria por la no consignación de las cesantías en un fondo administrador, pretensión que no fue acogida en la sentencia, es pertinente indicar que, como concluyó el a quo, y es aceptado por las partes, desde el año 2001 el empleador anualmente pagó directamente las cesantías al señor Buitrago, advirtiendo la Colegiatura que el Juez de primera instancia, al estudiar la pretensión del pago de este concepto por todo el tiempo laborado, negó tal pretensión aduciendo que fue por petición del trabajador, como confesó éste en el hecho 9º de la demanda, con su anuencia, que el empleador pagó anualmente ese concepto directamente al actor, trayendo a colación lo dicho por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en la sentencia 38757 del año 2010, decisión que no fue objeto de apelación por la activa. Y fue precisamente, por las mismas razones, que el a quo no accedió a la pretensión de que se condenara al demandado al pago de la sanción moratoria bajo estudio.

No obstante lo anterior, la censura insiste en que se condene a la pasiva al pago de dicha sanción moratoria, argumentando que, como indicó el fallador, desde el año 2001 se trató de un solo contrato (a término fijo) no contratos sucesivos, advirtiendo la mala fe del empleador, pues, bajo el pretexto o quizás con engaño al trabajador, de que se trataba de una finalización anual de cada contrato, liquidaba todas las prestaciones sociales y se sentía autorizado, vía de tal engaño, a entregarle de manera directa al actor las cesantías.

Para la Sala, es pertinente resaltar que el artículo 254 del CST establece lo siguiente: “*Se prohíbe a los empleadores efectuar pagos parciales del auxilio*

*de cesantías antes de la terminación del contrato de trabajo, salvo en los casos expresamente autorizados, y si los efectuaren perderán las sumas pagadas, sin que puedan repetir lo pagado.*” Como puede advertirse, es esta la sanción contemplada por el ordenamiento jurídico cuando el empleador paga directamente al trabajador las cesantías antes de la finalización del contrato, cuando no se trata de los casos autorizados, y que consiste en que se pierdan para dicho empleador las sumas pagadas sin que pueda repetir lo pagado, no siendo aplicable, por tanto, como pretende la censura, la sanción moratoria de que trata el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 en el sub lite, máxime cuando el a quo avaló esa entrega anual de las cesantías, en forma directa al trabajador, despachando desfavorablemente la pretensión de que se pagaran las cesantías causadas durante toda la relación laboral, y, por ende, negando la aplicación de la sanción de que trata el artículo 254 del CST, sin que la activa apelara ese punto, por lo que se confirmará también la absolución de la sanción moratoria en comento

Y con relación a la sanción moratoria de que trata el artículo 65 del CST, es pertinente advertir que el fallador de primer grado negó tal pretensión porque consideró que los descuentos realizados a la terminación del contrato, por préstamos que durante la relación laboral recibió el trabajador de manos de su empleador, razón por la cual éste no se pagó dinero alguno al actor por concepto de liquidación definitiva, son legales, señalando que la afirmación del demandante en su interrogatorio, den el sentido que los préstamos obedecieron al incumplimiento de las ARL o de las EPS en el pago de las incapacidades, se quedó en eso, en mera afirmación.

Por su parte, la censura estima que dicha indemnización sí procede, toda vez que el documento que contiene la liquidación de las prestaciones sociales y los salarios no da cuenta de ningún descuento, o al menos no relaciona cuál es el débito del empleado para con su empleador y que éste lo autorizara, señalando, además que fue el propio demandado quien fabricó su prueba a través de sus declaraciones, diciendo que existía una deuda y que decidió descontarla, cuando bajo criterios de buena fe debió probar en el proceso el valor que se le debía el trabajador y que así debió ilustrarlo en la liquidación de las prestaciones sociales, cosa que no hizo.

Para resolver, resulta pertinente recordar que, tratándose de deducciones al interior de un contrato de trabajo, las mismas pueden catalogarse en diferentes clases: voluntarias, legales, judiciales, por pagos en exceso, y finalmente los descuentos que se producen a la terminación del contrato de trabajo, lo anterior significa que en algunos casos debe mediar autorización del trabajador, y en otros casos la obligación surge por ministerio de la ley u orden judicial.

En relación con los descuentos autorizados por el trabajador, el art. 149 del Código Sustantivo de Trabajo, establece una prohibición de deducir, retener o compensar sumas del salario sin que medie la orden suscrita por el trabajador. De manera especial están prohibidos los descuentos o compensaciones por concepto de uso o arrendamiento de locales herramientas o útiles de trabajo deudas del trabajador para con el empleador, sus socios, sus parientes o sus representantes; también la indemnización por daños ocasionados a locales, máquinas materias primas, productos elaborados o pérdidas o averías de elemento de trabajo, las cuales requieren una orden judicial salvo que medie autorización del propio trabajador. Lo mismo sucede con la entrega de mercancías provisión de alimentos y precios de alojamiento.

También debe tenerse presente que, a pesar de existir una orden escrita del trabajador, tampoco se puede efectuar la retención o deducción cuando con esta se afecte el salario mínimo legal o convencional o la parte del salario declarada inembargable por la ley, en razón de la quinta parte (1/5) de lo que exceda del salario mínimo legal.

Y en cuanto a los descuentos realizados a la finalización del contrato de trabajo, que es precisamente la situación planteada en la demanda; es necesario diferenciar estas deducciones a aquellas que se realizan mientras el contrato del trabajo estuvo vigente.

Pues es claro que, mientras el contrato estuvo vigente, se requiere la autorización previa y expresa del trabajador, pero, una vez ha concluido la relación laboral, no se requiere de esta autorización siempre y cuando las

acreencias que se encuentren a cargo del trabajador sean de carácter legal y exigibles.

Al respecto se pronunció la Corte Suprema de Justicia, en sentencia SL868-2020 con ponencia del magistrado Ernesto Forero Vargas en los siguientes términos:

*“Además, ésta Corte igualmente señaló que los descuentos no autorizados por el asalariado no son legales mientras se encuentre vigente la relación laboral, pero una vez ésta termine, no tiene la misma connotación, porque también desaparece la garantía para el crédito otorgado por el empleador, que lo es el salario y las prestaciones sociales...”*

Y en sentencia SL525-2020, con Radicación 74363, del 17 de febrero, precisó, respecto del artículo 59 del CST, precisó:

*“De la norma transcrita es dable entender que no se puede descontar, retener, deducir o compensar valor alguno del sueldo o prestaciones de un trabajador sin la autorización expresa y por escrito de éste durante la vigencia de la relación de trabajo, para evitar abusos por parte de las empresas, pero nunca ha sido el objetivo de la ley exonerar de responsabilidades al trabajador frente a sus deudas para con la empresa.*

*Difiere el entendimiento de la norma cuando se está en el momento de la terminación de la relación de trabajo y el trabajador presenta deudas para con su empleador; en estos casos no se requiere, en rigor, de autorización escrita de descuento, pues las normas prohibitivas de la compensación o deducción sin autorización expresa del trabajador, rigen durante la vigencia del contrato de trabajo, pero no cuando éste termine.”*

Criterio que ratifica la Sala de Casación laboral de ese alto tribunal en la sentencia SL2120-2022.

Sobre la existencia de dichos préstamos y que estos no habían sido pagados por el trabajador a la finalización del contrato, es pertinente advertir que el propio actor, en el libelo introductorio, admite que la existencia de esos préstamos pero dice que lo fueron por los valores de unas incapacidades médicas que no pagaron la EPS y la ARL y que el valor se abonaría cuando

éstas pagaran las mismas, reconociendo, en el interrogatorio que absolvió, el pago completo de su salario, pero bajo esas circunstancias.

No obstante, la única testigo que compareció al proceso, la señora Silvia Stella Zapata Henao, Secretaria en el establecimiento de comercio Metálicas Castilla, de propiedad del demandado, indicó que el demandado sí le hacía préstamos al actor, y que lo sabe porque ella misma era la encargada de entregarle los dineros, que eso era muy seguido porque él constantemente estaba haciendo préstamos. Ante la pregunta sobre si al actor, por esos días que se incapacitaban, éstas no se le cancelaban, respondió: *“Sí, a él todo se le cancelaba.”*, y al indagársele sobre si los préstamos eran con ocasión a esas incapacidades, contestó: ***“No; eran préstamos para cosas personales de él.”***, agregando: “Los préstamos se hacían para descontarlos de los salarios de las liquidaciones, pero cuando le iban a pagar o cuando se le iba a entregar las liquidaciones, él decía que no se podía quedar sin plata, entonces que no se los descontaran todos, entonces por eso no se le descontaban.”


Sobre lo que ocurrió a la finalización del contrato, explicó la testigo: *“Él no se presentó, pero yo sí le hice varias llamadas y nunca me las contestó. Yo le hice varias llamadas para preguntarle qué le había pasado y nunca me contestó.”* Lo que concuerda con lo dicho por el demandado en su interrogatorio cuando al preguntársele sobre la liquidación de las prestaciones sociales del año 2016, que tiene su firma y no la del trabajador, y en la que no se contempla el descuento por créditos, respondió: *“Esa fue la liquidación que se había hecho, lo que le correspondía a él; yo la tenía lista para que cuando él llegara hiciéramos digamos como un cruce de cuentas, mira Renso como quedamos que usted me va a pagar, me va a hacer algún abono, mira eso es su liquidación y yo tenía ni qué hacer ni lo todo lo que daba, todo lo de ley, buscándolo a ver como cuadraba con él pero él nunca apareció, el abandona el trabajo, jamás volvió.”* Y en el punto específico de por qué la liquidación no contempla el préstamo, respondió: *“El préstamo, por lo mismo le digo, porque yo estaba esperando que él apareciera y hacerle la liquidación, vea esta su liquidación, esto le da, usted me debe tanto, dígame cómo quedamos, qué hacemos, al menos que me firmará la liquidación, porque digamos él me quedó debiendo a mí mucha plata y la liquidación de él, pues era poquita, pero yo sí quería hablar con él, por eso lo quería buscar; entonces siempre estuve atento*

a que él llegara a mi domicilio de trabajo, pero nunca llegó, lo traté de buscar en muchas ocasiones, nunca apareció. Yo hice hasta lo imposible para buscarlo y mirar cómo quedaba con él, pero nunca apareció, siempre lo estuve esperando”; manifestando, además, que la liquidación quedó ahí y él consideró que quedaron a paz y salvo pues era más lo que le debía el actor.

Ahora, contrario a lo manifestado por la censura, en el expediente digital obran los comprobantes de egreso que dan cuenta de los préstamos que el empleador realizó al actor (Folios 1-26 de la carpeta digital contentiva de los mismos), y que corresponden a la relación que el demandado realizó al contestar la demanda así:

VALOR ENTREGADO EN MUTUO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE DOCUMENTO
\$ 300.000	Dic 18 del 2012
\$ 1.311.240	Feb 21 del 2013
\$ 600.000	Oct 17 del 2013
\$ 500.000	Oct 17 del 2013
\$ 600.000	Oct 17 del 2013
\$ 200.000	Sept 09 del 2013
\$ 385.000	Sept 25 del 2013
\$ 200.000	Nov 23 del 2013
\$ 2.000.000	Dic 06 del 2013
\$ 500.000	Dic 07 del 2013
\$ 500.000	Dic 18 del 2013
\$ 2.500.000	Feb 22 del 2014
\$ 500.000	Mar 01 del 2014
\$ 400.000	Jul 24 del 2014
\$ 2.000.000	May 09 del 2015
\$ 350.000	Jun 24 del 2016
\$ 800.000	30 de julio del 2016
\$ 3.900.000	Pago de moto Yamaha
\$ 905.000	Pago de gastos de traspaso

Dichos préstamos, sumados, dan un valor muy superior al señalado en la liquidación definitiva de prestaciones sociales y vacaciones elaborada por el empleador, que se recuerda era por el lapso comprendido del 1 de enero de 2016 a la fecha de terminación del contrato, y que, para mayor ilustración, es la siguiente:

LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES	
Nombre del trabajador:	RENSON DE JESÚS GÓMEZ BUITRAGO
Fecha de ingreso:	04 de enero del 2016
Fecha de retiro:	20 de agosto del 2016
Días laborados:	227
Días prima:	50
Salario base:	\$ 767.155 (\$689.455 + \$ 77.700)
Motivo del retiro:	Renuncia del trabajador
Fecha de liquidación:	31 agosto del 2016
LIQUIDACIÓN	
Cesantías	\$ 483.734
Intereses Cesantías	36.603
Prima	106.549
Vacaciones	217.370
Total	\$ 844.256
Se hace constar que el empleador no le queda a deber absolutamente nada al trabajador por concepto de salarios, horas extras, recargos nocturnos, prestaciones sociales, indemnizaciones y demás conceptos que dieron como origen al contrato de trabajo que ha quedado terminado.	
El empleador,	El trabajador,
	
NICOLÁS HERNANDO LÓPEZ E. C.C. 98.575.075	RENSON DE JESÚS GÓMEZ BUITRAGO C.C. 15.534.140

Cabe resaltar que el actor no acreditó que dichos prestamos, que reconoce no pagó, fueron con ocasión de incapacidades no pagadas advirtiendo que, como bien resaltó el a quo, las incapacidades que reportó el actor siempre fueron pagadas en forma oportuna por la seguridad social, como dan cuenta los PDF 9, 10, 11, 12, 13, 19 del expediente digital.

Así las cosas, contrario a lo dicho por la censura, el actor sí tenía una deuda pendiente con el empleador a la terminación del contrato, por lo que, al descontar de la liquidación definitiva esos préstamos, tal deducción se torna legal, y si bien en el texto de la misma no se incluyó esa deducción, ello se explica porque el actor nunca se acercó a la sede del establecimiento de comercio de propiedad del demandando para discutir ese tópico.

En ese orden de ideas, es claro que no hay lugar a la indemnización moratoria de que trata el artículo 65 del CST, toda vez que no quedaron obligaciones laborales pendientes de pago ante los descuentos efectuados por su empleador, que, se repite, fueron legales al producirse a la terminación del contrato de trabajo.

Por todo lo anterior, se confirmará la sentencia de primera instancia que se conoce en apelación, y, al no prosperar el recurso interpuesto por la activa, de conformidad con lo establecido en el artículo 365, numeral 1º, del CGP, se condenará en costas de segunda instancia al actor en favor del demandado, dentro de las cuales se fija, como agencias en derecho, la suma de \$500.000.

#### **VIII. - DECISIÓN.**

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

#### **RESUELVE:**

**PRIMERO: CONFIRMAR** la sentencia de primera instancia, de origen y fecha conocidos, de conformidad a lo expuesto.

**SEGUNDO: Costas** en esta instancia, a cargo del actor y en favor del demandante, dentro de las cuales se fija como agencias en derecho, la suma de 500.000, por lo aducido en la parte motiva.

**TERCERO:** En su debida oportunidad, devuélvase el expediente al juzgado de origen.

**CUARTO: SE ORDENA** la notificación por **EDICTO** de esta providencia, que se fijará por secretaría por el término de un día, en acatamiento a lo dispuesto por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en auto AL2550-2021.

**Los magistrados**

  
**MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO**  
Magistrada

  
**ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**  
Magistrado

  
**LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL**  
Magistrada